

Núm. 71

5ª SESIÓN DE PRÓRROGA EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1901

PRESIDENCIA DEL SEÑOR BENITO VILLANUEVA

SUMARIO.—Asuntos entrados.—Mensaje y proyecto del poder ejecutivo abriendo un crédito suplementario al presupuesto del departamento de guerra, por la suma de 3627,33 pesos moneda nacional, para el pago de créditos de ejercicios vencidos.—La honorable cámara resuelve no insistir en su sanción anterior respecto á la modificación introducida por el honorable senado en el proyecto sobre organización del ejército.—Aprobación sobre tablas del dictamen de la comisión de peticiones en el proyecto de ley, en revisión, disponiendo que la administración de la lotería nacional entregue 50.000 pesos moneda nacional á la dirección del museo histórico é igual suma al archivo general de la nación.—El señor diputado Argerich pronuncia algunas palabras con el objeto de que quede constancia en el Diario de sesiones de lo infundado de un cargo que se le ha hecho en el honorable senado.—Mociones de orden.—Aprobación sobre tablas del dictamen de la comisión de peticiones en el proyecto de ley fijando la tarifa para los análisis que practique la oficina química del departamento nacional de higiene y creando una renta destinada á diversos servicios y gastos de administración del mismo.—Integración de la comisión de agricultura.—Mociones de orden.—Consideración del dictamen de la comisión de justicia en el proyecto de ley relativo á la jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales.

DIPUTADOS PRESENTES

Argañaraz, Argerich, Astrada, Avellaneda (F. F.), Bailestra, Barraquero, Barraza, Barroetaveni, Benedit, Bertrés, Berrondo, Billordo, Bollini, Boros, Bouquet Rollán, Bruchmann, Cantón, Capdevila, Cebalés, Carrasco, Carreras, Carreño, Castellanos (A.), Castellanos (J.), Centeno, Claros, Coronado, Cullen, Demaria, Echegaray, Ferrari, Ferreyra, Fonrouge, Gálvez, García, Garzón, Godoy (M. E.), Gómez (C. F.), Goucheau, Helguera, Iriondo (M.), Lacasa, Lagos, Leguizamón, Loureyro, Machado, Moreno, Olmos, Palacio, Pánelo, Parera (R.), Peña, Pérez, Quintana, Robert, Roberts, Romero, Ruiz, Salas, Sánchez, Santa Coloma, Santamarina, Sarmiento, Seguí, Silva, Soldati, Tissera, Torres, Ugaziza, Usandivaras, Vedia, Videla, Villanueva, Vivanco (P.), Vivanco (R. S.), Yofre.

AUSENTES CON LICENCIA

Bermejo, Falcón, Outes, Reyna, Varela Ortiz, Luro.

CON AVISO

Dantas, Gigena, Lartigau.

SIN AVISO

Alfonso, Avellaneda (M. M.), Balguier, Belterrain, Calderón, Carbó, Casares, Ezquer, Goloy (E.), Gómez

(M.), Hernández, Iriondo (U.), Lacavera, Laferrére, Lassaga, Leiva, Loveyra, Martínez, Olivera, Parera (F.), Rivas, Rosas, Serna, Torino, Torres (R. F.), Ugarte, Zavalla.

—En Buenos Aires, á 29 de noviembre de 1901, reunidos en su sala de sesiones los señores diputados arriba anotados, el señor presidente declara abierta la sesión, siendo las 3 y 50 p. m.

ACTA

—Se lee y aprueba la de la sesión anterior.

ASUNTOS ENTRADOS

COMUNICACIONES OFICIALES

Buenos Aires, noviembre 23 de 1901.

Al honorable congreso de la nación.

El poder ejecutivo tiene el honor de solicitar de vuestra honorabilidad la sanción, en las sesiones de prórroga, del adjunto proyecto de ley abriendo un crédito suplementario al ministerio de la guerra para el pago de créditos que han quedado pendientes, por haberes,

sión ese asunto. La comisión ha empezado á sacarle el cuerpo....

Sr. Claros—¡Está equivocado!

En ningún momento ha tratado la comisión de sacarle el cuerpo á ese ni á ningún asunto.

Sr. Cantón—¡Mucho mejor!

Quiere decir entonces que vendrá con despacho de comisión; y como ahora se presenta esta dualidad de que el defensor del proyecto es presidente de la comisión, está más obligada que nunca á traer ese asunto con un informe completo y acabado...

Sr. Presidente—¡Permítame el señor diputado! No hay nada en discusión, puesto que el señor diputado Bollini ha retirado su moción.

Sr. Cantón—Es una aclaración anticipada al debate que tendrá lugar.

Sr. Garzón—Pido la palabra.

Sr. Presidente—No hay nada en discusión...

Varios señores diputados—¡Que hable! ¡Que hable!

Sr. Garzón—No se me puede negar el uso de la palabra sin saber para que la pido.

Sr. Presidente—Simplemente hacía presente que no hay nada en discusión.

Sr. Garzón—Cuando en la sesión pasada hice y fundé una moción que ahora he vuelto á sostener, no fué mi ánimo entrar en discusiones anticipadas con el señor diputado por Tucumán, sino que se fijara una sesión en la que hemos de hablar largo sobre este asunto. Entonces no le pude hacer observaciones que debía haber hecho, porque no estaba presente.

Cuando él hizo una insinuación contra la comisión de agricultura, de la que yo formaba parte, diciendo que dejábamos dormir el asunto, hizo una afirmación que carecía de fundamento.

Sr. Cantón—Es exacto. El asunto dormía en la casa particular del señor diputado, y lo trajo inmediatamente al congreso.

Sr. Barraquero—¿Qué se discute?

Sr. Garzón—Una moción que voy á formular.

Sr. Barraquero—Pero debe formularla ya.

Sr. Garzón—No, señor. La fundo primero; después la voy á hacer. *(Risas)*.

Bien, señor presidente. En el acto que se recibió el expediente, la comisión no quiso proceder con ligereza por publicaciones que el mismo señor diputado críti-

có muchas veces. Entonces quiso proceder con datos seguros y mandó el diputado que habla á que hiciera la inspección del terreno, levantase planos y verificase todos los antecedentes que se daban. No podía hacer más que eso.

Fue por esto que en la sesión pasada le hubiera hecho presente al señor diputado que había hecho una observación anticipada, injusta; que la comisión iba á despachar; pero como él no estuviese presente, no quise hacerlo.

Ahora le digo que no cuadraba á la altivez, á la ilustración del señor diputado, que se ha declarado opositor, hacer la insinuación de que se hacía dormir el asunto, con esa altivez que lo caracteriza, debió pedir que se tratara, con ó sin despacho de la comisión, para probar ante la cámara que es irregular, como parece que manifiesta que lo va á demostrar.

Yo, señor presidente, cuando he pedido que se trate con ó sin despacho de la comisión, es para probar, despáchelo ó nó la comisión, que el asunto es correcto; y se lo he de probar al señor diputado con documentos fehacientes que no los va á levantar!

Sr. Cantón—Con teologías.

Sr. Garzón—Ahora, respecto á lo que dice que estoy obligado á presentar despacho, le pido al señor diputado que no me imponga obligación, que yo sé sostener las mías con toda la altivez, con todo el carácter y toda la energía que he demostrado en todos los actos de mi vida cuando he tenido que asumir responsabilidades! *(Muy bien!)*

Sr. Gómez (C. F.)—Falta ahora la moción. *(Risas)*.

Sr. Garzón—Ya no tiene objeto.

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES NACIONALES

A la honorable cámara de diputados.

Nuestra comisión de justicia en mayoría ha estudiado el proyecto de ley presentado por el señor diputado Barraquero sobre organización de la justicia federal, y por las razones que su miembro informante explicará, tiene el honor de aconsejaros prestéis vuestra sanción al siguiente

PROYECTO DE LEY

Artículo 1.º El poder judicial de la nación será ejercido:

- 1.º Por la corte suprema de justicia.
- 2.º Por dos cámaras federales de apelación.
- 3.º Por los jueces de sección de la capital y de cada una de las provincias.

CAPÍTULO I

De la suprema corte

Art. 2.º La corte suprema conocerá originaria y exclusivamente de las causas mencionadas en el artículo 101 de la constitución nacional y artículo 1.º de la ley número 48 de 14 de septiembre de 1863.

Art. 3.º La corte suprema conocerá también en última instancia, por apelación y nulidad, de las sentencias definitivas de las cámaras federales de apelación en los siguientes casos:

1.º De las que fuesen dictadas en las demandas contra la nación, á que se refiere la ley número 3952, de 6 de octubre de 1900.

2.º De las que recayesen sobre acciones fiscales contra particulares ó corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas ó por cumplimiento de contratos; por defraudación de rentas nacionales ó por violación de reglamentos administrativos y, en general, en todas aquellas causas en que la nación ó un recaudador de sus rentas sea parte actora, siempre que el valor disputado excediere de cinco mil pesos.

En la precedente disposición no se comprenden las acciones fiscales por cobro ó defraudación de rentas ó impuestos que sean exclusivamente para la capital y territorios nacionales y no generales para la nación.

3.º De las que recayesen en todas las causas á que dieren lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente ó regularidad de sus papeles.

4.º De las causas de extradición de criminales, reclamados por países extranjeros.

5.º De las dictadas en cualquier causa criminal, por los delitos de traición, rebelión, sedición y en las de homicidio, incendio ó explosión, piratería y naufragios, cometidos en alta mar á bordo de buques nacionales ó por piratas extranjeros; y en todos aquellos casos en que la pena impuesta excediera de diez años de presidio ó penitenciaría.

Art. 4.º La suprema corte conocerá también en las decisiones de las cámaras federales de apelación en los casos de revisión autorizados por el artículo 241 de la ley número 50 de 14 de septiembre de 1863, y el artículo 551 de la ley número 2372 de 17 de octubre de 1888.

Art. 5.º Conocerá igualmente de los recursos que se promovieran por retardo ó denegación de justicia, en los casos á que se refieren los artículos anteriores.

Art. 6.º La corte suprema conocerá, por último, en grado de apelación de las sentencias definitivas pronunciadas por las cámaras federales de apelación; por las cámaras de apelación de la capital; por los tribunales superiores de provincia y por los tribunales superiores militares, en los casos previstos por el artículo 14 de la ley número 48 de 14 de septiembre de 1863.

Art. 7.º Si procediese el recurso del artículo anterior y la sentencia de la cámara ó tribunal fuese confirmatoria de la de los juzgados de primera instancia, el apelado podrá solicitar su ejecución, dando fianza de responder de lo que percibiese, si el fallo fuese revocado por la suprema corte.

Dicha fianza será calificada por la cámara ó tribunal

y quedará de hecho cancelada, si la sentencia recurrida fuese confirmada por la suprema corte.

Art. 8.º En los casos en que la suprema corte conozca en grado de apelación, recibió el expediente, se dictará la providencia de autos y las partes podrán dentro de los diez días comunes é ininterrogables, siguientes al de la notificación de esa providencia, presentar una memoria sobre la causa, que se mandará agregar á los autos y sin más trámite quedará la causa concluida para definitiva.

Art. 9.º La suprema corte dirimirá las cuestiones de competencia que se susciten:

a) Entre las cámaras federales de apelación; entre éstas y un juez ó superior tribunal local de la capital, ó juez ó tribunal superior de provincia.

b) Entre un juez de sección y un juez ó superior tribunal local de la capital, ó un juez ó tribunal superior de provincia.

c) Entre un juez letrado de territorio nacional y un juez ó tribunal superior local de la capital, ó un juez ó tribunal superior de provincia.

d) Entre un juez ó tribunal superior local de la capital y un juez ó tribunal superior de provincia; entre los tribunales superiores de dos provincias; entre jueces de distintas provincias, y entre un tribunal militar y uno de cualquiera otra jurisdicción nacional ó provincial.

Art. 10. La suprema corte ejercerá superintendencia sobre las cámaras federales, jueces de sección, jueces letrados de territorios nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Art. 11. La superintendencia de la suprema corte comprende:

1.º Velar por el cumplimiento de esos reglamentos é imponer las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción.

2.º Exigir que se le remitan anualmente, ó en cualquier tiempo, una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas.

3.º Acordar ó denegar licencia á los miembros de las cámaras federales, jueces de sección, jueces letrados de los territorios nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, para ausentarse del lugar en que desempeñen sus funciones por más de tres días, ó dejar de asistir al tribunal, juzgado ú oficina por más de una semana.

4.º Imponer á los mismos penas disciplinarias por falta á la consideración y respetos debidos á la corte ó alguno de sus miembros, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia, ó por negligencia en el cumplimiento de su deber.

Las penas consistirán en prevenciones, apercibimientos ó multas que no excedan de doscientos pesos.

En caso de reincidencia, y cuando el abuso, la falta ó negligencia fuesen grave, la corte suprema los pondrá en conocimiento de la cámara de diputados de la nación, cuando fuesen cometidas por miembros de las cámaras federales de apelación, por los jueces de sección y jueces letrados de los territorios nacionales; y cuando ellas fuesen cometidas por los procuradores fiscales, defensores de menores, pobres y ausentes, los suspenderá, solicitando en seguida su exoneración del poder ejecutivo.

CAPÍTULO II

De las cámaras federales de apelación

Art. 12. Habrá dos cámaras federales de apelación, compuesta cada una de tres miembros, con asiento en la capital de la República, las que tendrán la jurisdicción apelada que les confiere la presente ley.

El ministerio público ante las cámaras será desempeñado por un funcionario que tendrá el título de procurador fiscal de las cámaras federales de apelación.

Art. 13. Las condiciones para ser miembros de las cámaras federales de apelación y procurador fiscal de las mismas, y para su nombramiento serán las que se requieren para ser miembro de la suprema corte.

Art. 14. No podrán ser simultáneamente jueces de la misma cámara los parientes ó afines dentro del cuarto grado civil, y en caso de afinidad sobreviniente el que la causare abandonará su puesto.

Art. 15. Cada cámara nombrará anualmente su presidente, y actuará con el secretario y demás empleados que le designe la suprema corte, de conformidad con la ley de presupuesto.

Art. 16. Las cámaras federales conocerán en grado de apelación, en segunda instancia, en todos los casos enumerados en el artículo 3.º de la presente ley.

Art. 17. Las cámaras federales conocerán en grado de apelación y en última instancia:

1.º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de sección en las causas de su competencia, que no fuesen de las enumeradas en el artículo 3.º de la presente ley y siempre que el valor disputado, en las causas civiles ó comerciales, exceda de quinientos pesos.

2.º De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces letrados de los territorios nacionales, aunque fuesen dictadas en causas del fuero común.

3.º De los recursos por retardación ó denegación de justicia por parte de los jueces de sección ó de los letrados de los territorios nacionales.

4.º De las consultas que elevaren los jueces letrados de los territorios nacionales en los casos del artículo 42 de la ley de organización de dichos territorios.

Art. 18. Contra las sentencias dictadas por las cámaras federales en los casos del artículo anterior sólo se concederán los recursos autorizados por los artículos 4.º y 6.º de la presente ley.

Art. 19. Las cámaras federales conocerán de las cuestiones de competencia que se susciten entre los jueces de sección, entre los jueces letrados de los territorios nacionales y entre éstos y aquellos.

Art. 20. Las cámaras federales observarán en materia civil y comercial, los procedimientos establecidos para la suprema corte en la ley número 50, de 14 de septiembre de 1863 y leyes especiales, y en materia penal el código de procedimientos criminal de la nación.

Art. 21. En caso de recusación ó impedimento de alguno de los miembros de las cámaras, será reemplazado por un miembro de la otra cámara, designado por sorteo; y si todos los miembros de ésta estuviesen igualmente imbedidos, el tribunal se integrará insaculando á la suerte el número de conjuces que sea necesario, de la lista á que se refiere el artículo 23 de la ley número 50 de 14 de septiembre de 1863.

Art. 22. Las cámaras federales se turnarán mensual-

mente en el conocimiento de las causas, y la falta de la concesión de los recursos determinará á cuál de las dos corresponde entender en ellas. No obstante lo dispuesto en este artículo, la cámara que hubiese prevenido en el conocimiento de una causa continuará interviniendo en ella.

Art. 23. Las cámaras federales dictarán su reglamento interno y lo someterán á la aprobación de la suprema corte.

Art. 24. Sin perjuicio de la superintendencia de la suprema corte, las cámaras federales de apelación, podrán corregir á sus secretarios y demás empleados subalternos, con apercibimientos, suspensión sin goce de sueldo por término que no exceda de quince días ó multas hasta cien pesos, por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, desobediencia ó falta á la consideración y respeto debidos al tribunal ó á alguno de sus vocales.

Art. 25. Los expedientes actualmente en trámite ante la suprema corte, que sean del conocimiento de las cámaras federales de apelación, según las disposiciones de la presente ley, se distribuirán para su resolución entre una y otra de dichas cámaras por sorteo y en iguales partes.

Art. 26. Los miembros de las cámaras, antes de entrar á ejercer sus funciones, prestarán juramento ante la suprema corte, de conformidad á lo que prescriben la constitución y las leyes de la nación.

Art. 27. Los miembros de las cámaras federales y su procurador fiscal, gozarán del mismo sueldo asignado á los miembros de las cámaras de apelación de la capital.

CAPÍTULO III

De los jueces de sección

Art. 28. La jurisdicción y competencia de los jueces de sección será la determinada en la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales federales de 14 de septiembre de 1863 y demás leyes especiales dictada por el honorable congreso nacional.

Art. 29. Quedan derogadas las disposiciones contrarias á la presente ley.

Bueno Aires, agosto 22 de 1901.

*Desiderio A. Rosas — Juan
Balestra — Alberto de Soldati
— D. M. Torino.*

A la honorable cámara de diputados.

Vuestra comisión de justicia en minoría ha estudiado el proyecto sobre organización de la justicia federal, presentado por el señor diputado Barraquero; y por las razones que su miembro informante aducirá, tiene el honor de aconsejaros prestéis vuestra sanción al siguiente

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Refórmanse las leyes sobre organización y jurisdicción de la justicia nacional en la forma que estatuye la presente ley.

Art. 2.º La corte suprema se compondrá de diez ministros.

No podrán ser simultáneamente miembros de ella los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, y en caso de afinidad sobreviniente, el que la cause cesará en sus funciones.

Anualmente designará por elección su presidente y el vicepresidente que ha de reemplazarlo.

Art. 3.º Corresponde á la corte suprema, originaria y exclusivamente, el conocimiento de las causas determinadas en el artículo 1.º de la ley de 14 de septiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia de la justicia nacional.

Art. 4.º La corte suprema conocerá igualmente:

- 1.º De los recursos que se deduzcan contra las sentencias definitivas y las interlocutorias, susceptibles de los recursos de apelación y nulidad, dictadas por los jueces federales de la República y por los de los territorios nacionales, aunque fueran dictadas en casos del fuero común, con excepción de aquellas que recayeran en causas en que el valor de la cosa litigada no excediere de quinientos pesos nacionales, con incluir costas.
- 2.º De los recursos y consulta que establecen los artículos 5.º y 6.º de la ley número 3952, en las causas por acciones civiles en que la nación sea demandada en su carácter de persona jurídica, y con la limitación fijada en el inciso precedente, en cuanto al monto de lo litigado.
- 3.º De las consultas que relevaren los jueces letrados de los territorios nacionales, en los casos del artículo 42 de la ley de organización de dichos territorios, con la misma limitación del inciso 1.º
- 4.º En grado de revisión, en los casos previstos por la presente y las leyes de procedimientos.
- 5.º Del recurso que autoriza el artículo 14 de la ley fecha 14 de septiembre de 1863, contra las sentencias definitivas pronunciadas por los tribunales superiores de las provincias y la cámara de apelación de la capital.
- 6.º De las quejas por atentados, retención ó denegación de justicia de los tribunales inferiores.
- 7.º De las contiendas de competencia entre un tribunal militar y uno de cualquier otra jurisdicción nacional ó provincial; entre una de las cámaras de apelación de la capital y un tribunal superior de una provincia; entre los tribunales superiores de dos provincias; entre un juez federal y un juez de la capital ó de alguna de las provincias; entre un juez de la capital ó de territorio nacional y un juez de provincia; entre jueces de distintas provincias, y entre jueces nacionales.

Art. 5.º La corte suprema formará tribunal cuando menos con la mayoría absoluta de sus miembros para decidir:

- 1.º De las causas de jurisdicción originaria, á que se refiere el artículo 3.º
- 2.º De los casos de jurisdicción apelada que determina el artículo 4.º, incisos 2.º, 3.º y 7.º, excepto en este último las competencias entre jueces nacionales.
- 3.º De los recursos contra sentencias definitivas dictadas por los jueces de sección de los territorios nacionales en las causas que versan sobre puntos regidos por la constitución nacional, por tratados con las naciones extranjeras y de las criminales por delitos de homicidio, incendio, explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar á bordo de buques nacionales, contra argentinos ó individuos de otra nación que no se halle en guerra con la Argentina.

De los que recayeran en todas las causas á que dieran lugar los apresamientos ó embargos marítimos en tiempo de guerra, sobre salvamento militar y sobre nacionalidad del buque, legitimidad de su patente ó regularidad de sus papeles.

De las causas de extradición de criminales reclamados por países extranjeros.

Art. 6.º Necesitará la suprema corte del número íntegro ó plenitud del tribunal con la concurrencia de las tres salas á que se refiere el artículo siguiente:

1.º Para los casos previstos en el artículo 4.º, incisos 4.º y 5.º

2.º Para conocer de los recursos de sentencia que imponga pena de muerte; no pudiendo confirmarla sino por unanimidad de votos.

Art. 7.º La corte suprema, con excepción de su presidente, se dividirá por sorteo en tres salas que se denominarán primera, segunda y tercera, las que se turnarán por mes para conocer de los recursos interpuestos contra las resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas no comprendidas en los dos artículos precedentes.

El turno se determinará por la fecha de la resolución ó sentencia recurrida, debiendo el presidente al dictar la providencia de «autos» mandar que pase la causa á la sala respectiva.

Art. 8.º La presidencia de cada una de las salas será ejercida por el vocal más antiguo de ella ó el de mayor edad si todos tuvieran igual tiempo, pero cuando por razón de suplencia viniera á formar parte del tribunal el presidente de la corte, á él corresponderá presidirla.

Art. 9.º Ocurriendo impedimento ó recusación, podrán también las salas fallar con sólo dos vocales, en los casos de apelación de resoluciones interlocutorias y de definitivas en juicios sumarios, siempre que las partes no pidiesen la integración de la sala, ó ésta no la ordenara por no conceptuarla necesaria ó conveniente.

Art. 10. Las sentencias y demás autos que dicten las salas deberán fundarse en la opinión conforme de la mayoría. Mas, cuando en las causas criminales hubiese de modificarse el fallo de primera instancia elevando la pena impuesta en él á más de ocho años, será necesaria la uniformidad de todos los miembros de la sala.

Art. 11. Habrá el recurso de revisión ante el tribunal pleno de la corte suprema contra las decisiones de las salas en los casos siguientes:

1.º Cuando se hubiese contrariado la jurisprudencia sentada en otra ó otras decisiones cuya publicación date ya, cuando menos, desde un mes.

2.º Cuando las de una de ellas estén en contradicción con las suyas propias ó las de otras salas pronunciadas en un intervalo menor de un mes.

Art. 12. El término para interponerse el recurso será de ocho días.

Art. 13. En los casos previstos en el inciso primero, dicho término se contará desde la última notificación.

La corte suprema no podrá entonces confirmar la variación de jurisprudencia, sino por unanimidad de votos.

Art. 14. Para los casos del inciso según lo el término empezará á correr desde el día siguiente en que sea totalmente conocido el último fallo ó resolución contradictoria á los anteriores por su publicación en el *Boletín Judicial*.

Art. 15. La corte suprema con asistencia por lo

menos, de la mayoría absoluta de sus miembros, ejercerá la superintendencia de la administración de justicia nacional, y sus facultades en tal carácter son:

- 1.º Representar al poder judicial ante los otros poderes del estado.
- 2.º Efectuar los sorteos que establecen los artículos 7, 17 y 18 de la presente ley y 2.º de la de fecha 24 de septiembre de 1878 sobre suplencias de jueces federales.
- 3.º Los nombramientos y remoción de sus empleados subalternos y demás actos mencionados en el artículo 11 de la ley de organización de la justicia nacional, fecha 16 de octubre de 1862.
- 4.º Velar por el cumplimiento de sus reglamentos imponiendo las penas disciplinarias que ellos fijen para los casos de infracción.
- 5.º Exigir que se le remita anualmente ó en cualquier tiempo que lo reclame, una relación de las causas entradas, del número y estado de las pendientes y de las falladas.
- 6.º Acordar ó denegar licencia á los jueces federales y á los procuradores fiscales para ausentarse del lugar en que desempeñan sus funciones, por más de tres días, ó dejar de asistir al tribunal, juzgado ó oficina por más de una semana.
- 7.º Imponer á los mismos y demás funcionarios ó empleados inferiores, penas disciplinarias por faltas á la consideración y respeto debidos á la misma corte ó á alguno de sus miembros; por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia, por desobediencia á los mandatos de la corte ó por negligencia en el cumplimiento de sus deberes, ya resulte de las causas mismas ó de los datos estadísticos. Estas penas consistirán en apercibimientos y multas que no excederán de cien pesos.
- 8.º Levantar las informaciones del caso por abusos, faltas, ó negligencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones, y así en este caso, como en el de reincidencia de aquellas faltas á que alude el inciso precedente, pasar los antecedentes á la cámara de diputados con el dictamen del procurador general de la nación á los efectos que hubiere lugar.

Art. 16. Las salas podrán también corregir las faltas de las personas que intervengan en los juicios con apercibimientos ó con multas que no excedan de cien pesos nacionales, y sin perjuicio del recurso de reposición que podrá interponerse ante ellas mismas en el término de tres días.

Art. 17. En los casos de impedimento ó de recusación de todos ó de la mayoría de los ministros de la corte suprema, la integración se hará con el presidente en primer término, y luego, según su orden, por el número de conjuces que se necesite de una lista de 25 abogados que reúnan las condiciones para ser miembros de la corte y que ésta formará por insaculación el 1.º de enero de cada año.

Art. 18. En los casos de impedimento ó recusación de alguno de los miembros de una sala, será él reemplazado, según su orden, por el presidente de la corte, por un vocal de las otras salas designado por sorteo, y si todos ellos estuviesen igualmente impedidos, por los conjuces y en la forma que prescribe el artículo precedente.

Art. 19. Corresponde al presidente de la corte suprema:

- 1.º Presidir la corte y representarla en sus relaciones oficiales con los poderes públicos.

Pero cuando lo preside en los casos de los artículos 5.º, 6.º y 15.º, no tendrá voto sino para decidir los empates. Fuera de ellos sólo tendrá voto cuando sea llamado á integrar tribunal de acuerdo con los artículos 17 y 18.

- 2.º Substanciar las causas que pendan ante la corte suprema. De las providencias de mera substanciación que él dicte podrá pedirse reforma ó revocatoria ante el tribunal ó salas respectivas.
- 3.º La superintendencia de la corte suprema, de acuerdo con lo que establezca el reglamento interno de ella.
- 4.º Las demás atribuciones que le estén conferidas por leyes especiales de la nación.

Art. 20. El ministerio público será desempeñado ante la corte suprema por un funcionario que tendrá el título de procurador general de la nación.

Art. 21. Deróganse todas las disposiciones que se opongan á la presente ley.

Art. 22. Comuníquese, etc.
Sala de la comisión, agosto 22 de 1901.

M. Argañaraz.

PROYECTO DE LEY

El senado y cámara de diputados, etc.

Artículo 1.º Réformase la ley sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales de 14 de septiembre de 1863, en la siguiente forma:

Art. 2.º Créanse dos cámaras federales de apelación, compuesta cada una de tres miembros y un procurador fiscal, para las dos, con asiento en la capital de la República, las que conocerán en grado de apelación en las causas de jurisdicción apelada del fuero federal á que se refiere la presente ley.

Art. 3.º Ambas cámaras se denominarán primera y segunda, y tendrán competencia territorial en toda la República, debiendo turnarse para el recibo de las causas, en la forma que determine la suprema corte de justicia federal.

Art. 4.º Son requisitos para ser miembros de las cámaras federales: ser argentino nativo ó naturalizado, con veintidós años de ciudadanía en ejercicio, ser abogado con título expedido ó reconocido por universidad nacional y tener diez años de ejercicio profesional en la nación ó haber desempeñado en ésta por igual tiempo una magistratura.

No podrán ser simultáneamente miembros de las cámaras, ni juez federal, los parientes consanguíneos ó afines dentro del cuarto grado; en caso de afinidad sobreviniente, el que la cause cesará en sus funciones.

Art. 5.º Los miembros de las cámaras federales y el procurador fiscal serán nombrados en la misma forma que los de la suprema corte de justicia nacional.

Art. 6.º Cada cámara tendrá uno ó más secretarios, abogados, un ujier y demás empleados que le fije la ley de presupuesto.

La suprema corte nombra y renovará estos empleados y reglamentará sus atribuciones y deberes.

Art. 7.º Los miembros de las cámaras y fiscales prestarán juramento ante la suprema corte, de desempeñar fielmente su cargo.

Los secretarios prestarán ese juramento ante la cámara respectiva.

Art. 8.º Cada cámara designará anualmente su presidente y su reemplazante, el que firmará los decretos de mera substanciación. Al constituirse las cámaras,

serán elegidos presidentes los miembros de mayor edad.

Art. 9.º Las cámaras federales conocerán en grado de apelación y en segunda instancia:

- 1.º De todas las causas á que den lugar los apresamientos ó embargos marítimos por razón de la guerra.
- 2.º De los de homicidio, incendio, explosión, piratería y naufragios cometidos en alta mar á bordo de buques nacionales ó por piratas extranjeros.
- 3.º De las causas en que la nación sea parte por falta de cumplimiento á los contratos celebrados por ella con particulares ó corporaciones nacionales ó extranjeras, siempre que la cantidad exceda de cincuenta mil pesos moneda nacional. Siendo hasta esta cantidad, ó menos, no procederá apelación. Tampoco procederá la apelación para ante la suprema corte en los demás casos de este artículo, cuando la sentencia de segunda instancia sea confirmatoria en todas sus partes y dictada con la conformidad de los tres miembros de la respectiva cámara.

Art. 10. En los casos del inciso 2.º del artículo anterior, los jueces de sección ó territorios federales tendrán las atribuciones conferidas por el título III y siguientes del código de procedimiento criminal.

Art. 11. Las cámaras federales conocerán en grado de apelación y en última instancia en materia civil y comercial, de los recursos que se deduzcan de las resoluciones de los jueces de sección, cuando esos recursos procedan de conformidad á las leyes en los casos de los incisos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º y 10.º del artículo 2.º de la ley de 14 de septiembre de 1863, sobre jurisdicción y competencia en los tribunales nacionales; y en materia criminal en las que se imponga pena menor de diez años de presidio.

Se exceptúan del inciso 8.º los casos previstos en el inciso 2.º del artículo 9.º de esta ley, en los cuales procederá la apelación ante la suprema corte.

Art. 12. Conocerán de las causas del fuero común ó federal falladas por los jueces de los territorios nacionales.

Art. 13. La suprema corte conocerá de los recursos de apelación y nulidad de las sentencias de las cámaras federales, dictadas en los casos enumerados en el artículo 9.º de esta ley.

Art. 14. Los procedimientos á que deben sujetarse las cámaras federales en los casos de su competencia serán los que rigen para la suprema corte nacional.

Art. 15. Las cámaras funcionarán todos los días hábiles y las audiencias serán públicas, á menos que razones de decoro requieran reserva.

Art. 16. Las cámaras formarán tribunal con el presidente y uno de los vocales para expedir sentencias meramente interlocutorias, á cuyo efecto los vocales se turnarán mensualmente, y en caso de impedimento ó recusación del presidente ó vocal en turno, se integrará con el otro.

Art. 17. Para pronunciar sentencia definitiva, las cámaras procederán con el número íntegro de sus miembros, á excepción de los casos de impedimento ó recusación, siempre que cualquiera de las partes no pidiera integración del tribunal.

Art. 18. En los casos de impedimento, recusación ó discordia, las cámaras se integrarán insaculando á la suerte la lista que deba formar la suprema corte, con arreglo al artículo 23 de la ley de 14 de septiembre de 1863.

Art. 19. No obstante la superintendencia conferida por esta ley á la suprema corte, las cámaras federales podrán reprimir, con apercibimiento y pena de multa que no exceda de cien pesos moneda nacional ó arresto de veinte días, las faltas contra su autoridad ó decoro, que se cometan en las audiencias ó escritos, ó dentro de la casa donde se administre justicia.

Art. 20. Las cámaras federales, los jueces de sección y de los territorios nacionales pasarán anualmente á la suprema corte una memoria del movimiento de las causas, observando á la vez los abusos ó inconvenientes que hubiesen notado en la marcha de la administración de justicia ó en la aplicación de las leyes y proponiendo todas aquellas medidas tendentes á su mejoramiento.

Art. 21. La suprema corte dictará sentencia definitiva con el número íntegro de sus miembros, á menos que las partes estén conformes en que sea fallado el juicio con simple mayoría de ellos. Para las sentencias interlocutorias bastará que formen tribunal el presidente y dos vocales, quienes se turnarán sucesivamente en la forma establecida en el artículo 16 de la presente ley.

Art. 22. En los casos de recusación ó impedimento de los miembros de la suprema corte será integrada con los miembros de la cámara federal, que no entiendan en el asunto, y en caso de recusación ó impedimento de éstos, será integrada en la forma establecida en la ley de 14 de septiembre de 1863.

Art. 23. La suprema corte decidirá:

- 1.º De las quejas por retardo ó denegación de justicia de las cámaras federales y jueces de sección y territorios federales.
- 2.º De todas las competencias que se susciten entre los jueces ó cámaras federales, ó de alguno de éstos con cualquier tribunal de la capital ó provincias; entre los tribunales superiores de diversas provincias, ó entre éstos y los tribunales de la capital; entre un juez federal y un juez de provincia ó de la capital.

Art. 24. La suprema corte ejercerá superintendencia sobre las cámaras federales, jueces de sección, jueces letrados de los territorios nacionales y demás funcionarios de la justicia federal, debiendo dictar los reglamentos convenientes para procurar la mejor administración de justicia.

Art. 25. La superintendencia de la suprema corte comprende:

- 1.º Destituir los procuradores fiscales de sección ó de territorios nacionales, los defensores de menores, de pobres ó ausentes, y demás empleados inferiores de la administración de justicia federal, por faltas graves en el cumplimiento de sus deberes.
- 2.º Imponer á los miembros de las cámaras federales, jueces y demás funcionarios de su dependencia penas disciplinarias por faltas ó negligencia en el cumplimiento de sus deberes, cuyas penas consistirán en apercibimientos y en multas que no excedan de cien pesos moneda nacional.
- 3.º Levantar las informaciones del caso por abusos, faltas ó negligencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones y pasarlas á la cámara de diputados de la nación con el dictamen del procurador general de la nación, á los efectos que hubiere lugar.

Art. 26. Créase un juzgado federal en la provincia de Buenos Aires, con el mismo personal del que ac-

tualmente existe, debiendo la suprema corte establecer la forma, los turnos y reparto de expedientes existentes.

Art. 27. Queda comprendida entre las causas de responsabilidad que determina el artículo 45 de la constitución nacional, el retardo en el pronunciamiento de las sentencias definitivas.

Art. 28. Deróganse todas las disposiciones que se opongan á la presente ley.

Art. 29. Comuníquese, etc.

J. Barraquero.

Junio 25 de 1900.

Sr. Presidente—Está en discusión.

Sr. Balestra—Pido la palabra.

Señor presidente: tengo que informar sobre este proyecto por ausencia del doctor Torino, á quien la comisión de justicia había encargado esta tarea; y he creído que no se debía esperar más, estando este asunto tan retardado y siendo tan urgente.

Voy a tratar de ser lo más breve posible, interpretando los sentimientos de la cámara, á la que el tiempo le escasea y la tarea le sobra.

Señor presidente: desde el año 63, en que se dictó la ley de jurisdicción y competencia de los tribunales federales, siendo su miembro informante nuestro colega el doctor Quintana,—hermoso ejemplo de cómo se juntan las generaciones en la obra común y de la rapidez del progreso del país, que permite á los autores de una institución concurrir á su reforma,—desde aquella fecha hasta ahora, no se ha introducido más reformas en el organismo á que se aplicaba esa ley de competencia y de jurisdicción, consistente en una suprema corte y tantos juzgados federales de sección como provincias tiene la República, que la creación de dos juzgados federales en la capital de la República. El país, entretanto, en ese periodo de tiempo, ha sufrido una de las transformaciones más grandes de que haya ejemplo, no sólo en esta América, sino en toda la tierra, por la afluencia de población y el aumento de riqueza, es decir, los elementos que crean las relaciones jurídicas, que hacen necesaria la justicia. La justicia federal, y especialmente la corte, ha quedado allá, en su estado primitivo, algo así como un organismo de otra época, algo paleontológico, obligado á servir las necesidades cada vez más crecientes del oleaje nuevo, que ha acabado por producir el efecto que era preveible. El viejo organismo recargado hasta abrumarlo, no ha podido marchar, no ha podido dar salida á todas las necesidades que lo solici-

taban. Y ahí está, en una de las situaciones más graves para el país, pues en realidad no existe justicia de apelación en materia federal en la República Argentina; y digo que esto es lo más grave, porque aun la mala justicia, cuando puede ser reparable, no es peor que la falta de justicia. Hay casos que parecen sátiras. Un interdicto de obra nueva fué fallado á los doce años, tiempo más que suficiente para prescribir entre presentes. ¡Si se habría hecho vieja la obra nueva! Sólo se puede comparar el estado de la corte, con el hecho material sugestivo que tenemos á la vista, el de ese viejo cabildo, venerable edificio destinado á los pocos vecinos que concurrían á los cabildos coloniales, desahogado hoy á que hormigúee adentro, en cuartos insalubres, peores que los de cualquier conventillo, toda la institución judicial de la capital, habiendo secretarías que ocupan los antiguos calabozos y hasta los zaguanes del cabildo colonial... Destinar un organismo nuevo á ocupar un edificio viejo, en el que no cabe, es algo como tener esta corte antigua para servir á todas las necesidades jurídicas del país, que la anonadan, exigiéndole más de lo que humanamente se puede hacer.

Yo voy á ahorrar á la cámara una cantidad de datos estadísticos; pero me ha de ser permitido mostrar algunos que revelan el crecimiento enorme de la justicia federal, á que tiene que responder la corte, á la cual van á desembocar la mayor parte de las causas por vía de apelación.

La estadística que corresponde á esa justicia es muy deficiente. ¡Cómo no ha de serlo! Hay pilas enormes de expedientes polvorosos, olvidados. ¡Si el desaliento penetra en todos cuando no se puede trabajar, cuando no se tiene la satisfacción de tener el despacho al día! Y es natural que con el desaliento nada marche bien, ni la estadística, que revela verdades dolorosas. Cuando con la estadística se puede aspirar á una cifra que haga honor á los que la producen, se pone esmero en ella. ¡Pero quién no se va á desalentar con el número de causas paralizadas que existen y la imposibilidad absoluta de despacharlas! Puedo asegurar que es considerable el número de causas. Juzguémolo por el número de causas que se inician. Las que se han iniciado en los dos años próximos pasados son 22,258, que dan un promedio de 11,129 por año en los diez y seis tribunales federales.

En los territorios se han iniciado en los dos últimos años, 1899 y 1900, 3642 causas, que dan un promedio de 1823. Total, próximamente, 13.000 causas por año. Excuso sacar las consecuencias que fluyen de esto. La corte es el tribunal único de apelación de diez y siete juzgados federales y de nueve juzgados de territorio. ¡Cómo va á bastar para el despacho de todos los asuntos que se le mandan! Es inútil que se hagan prodigios de trabajo, y la corte los ha hecho alguna vez. El año 1899 ha despachado dos causas por día, es decir, 700 en el año. Pero esto es nada, es sacar una gota de agua del océano.

Bien, señor presidente: he allí el mal; su causa es la de existir un sólo tribunal supremo de apelación. Suprimir la causa es quitar el mal; quiere decir, que crear otros tribunales de apelaciones sería solucionar directamente el problema. Aquí se presentan dos sistemas: uno propone dividir la corte en tres salas; el otro propone crear dos cortes intermedias, dos cámaras federales de apelación, como dice el proyecto. Una de estas ideas es la del proyecto presentado en la comisión por nuestro colega el doctor Argañaraz y la otra por el doctor Barraquero.

Entiendo que ambos van á fundar su voto; y en consecuencia, me ahorraré la exposición de las ventajas y las deficiencias de cada uno de estos dos sistemas, y me limitaré á dar las razones que han primado en el ánimo de la comisión para aceptar las cámaras federales.

Desde luego, ante la prescripción del artículo constitucional que establece la justicia federal, y de la del inciso 17 del artículo 67, que establece la facultad del congreso para crear los tribunales inferiores á la suprema corte de justicia, los proyectos son perfectamente constitucionales. Entonces, para resolver el problema, hay que referirse á los términos en que él está planteado, y ahondándolo un poco más, hago notar á la cámara que ese problema comprende dos partes: una permanente, institucional, que se refiere al modo como se ha de organizar la justicia federal; la otra transitoria, del momento, que consiste en esa enorme acumulación actual de causas que es preciso hacer desaparecer fallándolas, para que la justicia pueda desempeñar libremente su cometido en adelante.

En la parte institucional—primer término de este doble problema—la comisión ha creído que el sistema más per-

fecto es aquel que acerca más la apelación al juez de la sentencia, es decir, el sistema de las cortes de circuito, establecido en los Estados Unidos, aun cuando aquella organización tenga caracteres propios que son difíciles de imitar.

Respecto á la cuestión transitoria, al despacho de esa enorme cantidad de asuntos hoy existentes, la comisión ha juzgado que una corte de diez miembros que pudiera dividirse en tres salas, podría dividirse en cuanto á las personas; pero no podría trabajar al al mismo tiempo como corte y como cámara de apelación; y cuando el trabajo que se exigiera fuera tan grande que requiriera el trabajo de toda la corte constantemente y de todas las cámaras constantemente, también para despejar esa situación de hecho y por lo mismo gravísima, pues sin liquidarla es imposible seguir adelante, sucedería que mientras estas tres cámaras en que se dividiera la corte estuvieran trabajando como cámara, sería necesario á la vez que estuvieran trabajando como corte, y aparte de que una corte de diez miembros despacharía con más dificultad que una de cinco,—ó la corte ó esas cámaras tendrían indudablemente que interrumpir sus tareas,—queriéndose hacer el trabajo rápido, se produciría por el contrario una obstaculización tal, que en definitiva no habríamos hecho sino ampliar los tribunales, echándoles encima una situación insoluble hoy, que sería igualmente insoluble mañana.

Partiendo de este punto de vista, había otra razón seria.

Subdividida la corte en varias salas, quedaba establecido el principio de que el tribunal de apelación de los jueces federales había de radicarse en la capital de la República solamente, y quedaban por lo tanto suprimidas las cortes de circuito que en el ánimo de la mayoría de la comisión constituyen el sistema más perfecto á que pueda llegarse.

Entonces hemos adoptado un temperamento de transición, obrando con este criterio, que es tan necesario, de hacer lo posible, para que lo mejor no venga á obstaculizar la ejecución de lo bueno; de salvar por lo pronto la situación existente, creando dos cámaras radicadas por ahora en la capital de la República, para que puedan despachar esta enorme masa de asuntos, dejando establecido el sistema de las cámaras

para que él pueda ser ampliado al resto del país, cuando el honorable congreso lo crea conveniente; y de esta manera intentamos liquidar la situación presente echando á la vez las bases del sistema definitivo de la organización judicial del país.

Ahora, en cuanto á la organización que hemos debido dar á estas cámaras intermedias, para que en ellas terminen unos asuntos y tramiten otros, dejando el fallo definitivo á una tercera instancia, muy restringida por cierto, pero inevitable, me parece que es asunto que se refiere á la discusión en particular y que yo dañaría el proyecto, que ante todo necesita el ánimo resuelto de la cámara de hacer algo en este asunto, si continuara hablando por un momento más para fundarlo en general, por cuyo motivo me he limitado á decir lo más indispensable, dando por terminado con esto mi informe.

He dicho. (*Muy bien!*)

Sr. Argañaraz—Pido la palabra.

Empezaré por manifestar desde el primer momento, señor presidente, que en presencia del despacho de la comisión en mayoría, dada la autorizada opinión de los ilustrados colegas de la comisión de justicia que lo subcriben, es asaz difícil mi situación en este debate para defender el dictamen que por mi parte he expedido en minoría, disintiendo fundamentalmente de aquél.

A mi vez, trataré de ser muy breve y conciso en mi informe, para corresponder á la benevolencia con que la honorable cámara quiera atenderlo, porque pienso que no tengo derecho para abusar de su atención con una exposición demasiado extensa, cuando no sabría siquiera interesarla con los atractivos de la elocuencia que no poseo, y porque, también, á esta altura de las sesiones, es muy sensible distraer cualquier tiempo que pueda destinarse á la consideración de otros asuntos que esperan la sanción de la cámara.

Distribuyendo los asuntos existentes en cartera, la comisión de justicia tuvo á bien confiarme el estudio del proyecto presentado por el señor diputado por Mendoza doctor Barraquero, en el año anterior, quien, con plausible insistencia, había promovido por segunda vez la reforma de la ley de jurisdicción y competencia de la justicia federal.

Consagrándole la especial atención con que he de mirar todos los asuntos que se relacionan con el ejercicio de mi profesión, por el interés que en mi espíritu des-

piertan, hice un detenido estudio comparativo de este proyecto con todos los demás conocidos y que habían sido presentados años atrás; y, pesando las ventajas como los inconvenientes que pudieran presentar unos y otros con su adopción, llegué al firme convencimiento de que el proyecto más viable, más práctico, más útil, es el que he subscrito en disidencia, no teniendo la suerte, como he dicho, de coincidir en opiniones con mis distinguidos colegas de comisión.

Esto no se debe á un vanal sentimiento de amor propio, ni al prurito de singularizarme en mis opiniones. Al contrario, soy refractario por carácter al exhibicionismo, y habría estado mucho más dentro de mi natural tendencia aparecer compartiendo las opiniones de la mayoría y subscribiendo en silencio su despacho, si no fuera que, después del estudio comparado á que me he referido, he formado la más profunda convicción de que el proyecto presentado en mi despacho no sólo encuadra mejor dentro de los preceptos constitucionales relativos á la jurisdicción apelable de la corte suprema, si que también responde á la aspiración general de garantizar al país una justicia rápida, gran desideratum que todos anhelamos, como medio de hacer efectiva esa hermosa promesa del afianzamiento de la justicia, consagrada en el preámbulo de nuestro código fundamental, para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino.

Señor presidente: reproduciendo casi literalmente las disposiciones de la constitución norteamericana, la nuestra, en el artículo 100, enumera los diversos casos del fuero federal, y por el artículo 10. deslinda la jurisdicción originaria y la por apelación de la corte suprema.

Es tan clara y tan concluyente respecto de la primera, que la duda no ha podido surgir jamás.

No ha sucedido lo mismo en cuanto á la jurisdicción apelada, porque la primera parte del artículo 101 ha despertado la misma divergencia de opiniones que su modelo suscitó, dividiendo á los publicistas de la Unión norteamericana.

Efectivamente, del texto del artículo 101: «en estos casos la corte suprema ejercerá la jurisdicción por apelación, según las reglas y excepciones que prescriba el congreso», ha venido la duda acerca de la extensión de las atribuciones de éste respecto de esta facultad de reglamentación, sosteniéndose de una parte que, estableciendo

como regla general el artículo 101 la jurisdicción por apelación, ella no puede ser limitada sino por un reducido número de excepciones; mientras que otros son partidarios de la facultad discrecional del congreso para la misma reglamentación.

Con todo, la opinión de estos es más teórica que de un alcance práctico, porque es para ellos mismos una convicción que la jurisdicción apelada es la que reviste á la corte del más alto respeto y del prestigio que la distinguen, y convienen, con generalidad, en que no debe limitarse sino por pocas excepciones.

De aquí ha nacido la diversidad de sistemas que se proponen los diferentes proyectos, á que he hecho anteriormente alusión, para reglamentar la jurisdicción apelada de la corte, y que pueden reducirse á cuatro categorías.

Por unos se crean las cortes de circuito ó de distrito, dándoles una jurisdicción originaria para ciertas causas, con apelación á la corte suprema.

Otros crean también cámaras federales de apelación, de existencia paralela, puede decirse, con la corte suprema, y dividiendo las causas según su naturaleza, hacen los fallos de los jueces de sección apelables directamente ante la Suprema corte, *omisso medio*, en todas las regidas por la constitución, las leyes de la nación y los tratados con las potencias extranjeras, y en las demás, sólo á las cámaras de apelación.

El tercer sistema, dentro del cual está el despacho de la mayoría de la comisión, crea tribunales intermedios ó sean cámaras federales de apelación, admitiendo una tercera y última instancia para ante la corte suprema en ciertos asuntos.

Y finalmente el que consiste en aumentar el número de magistrados de al corte suprema para que ésta, con la totalidad de sus miembros ó bien desdoblandose en salas, conozca de las causas de jurisdicción apelable.

No es mi objeto entrar al estudio y á la discusión de estos diferentes proyectos, y sólo me concretaré á los dos últimos que informan los dos despachos de comisión, constitutivos de la orden del día en debate.

Al que acaba de fundar el miembro informante de la mayoría de la comisión, se oponen, en mi concepto, dos fundamentalísimas objeciones, que son las que han influido poderosamente en mi espíritu para inclinar mi juicio en con-

tra: de carácter constitucional la una, y la otra la incongruencia del proyecto con el objetivo principal que la reforma se propone.

Voy á permitirme invertir el orden y ocuparme ante todo de esta última.

Se ha expresado una gran verdad, señor presidente, cuando se ha dicho que hoy una gran montaña de expedientes cierra el acceso á la corte suprema. Para remover ese obstáculo, y dejar expedita la acción de la justicia, á fin de que obtengan la más pronta y eficaz solución de sus litigios todos aquellos que tengan que ventilarlos ante la justicia federal, es de todo punto indispensable la reglamentación de la jurisdicción apelable de la corte suprema, de manera que responda á ese propósito.

Y bien, pues, yo digo que no es consultar ese fin á que debe encaminarse la reforma, crear tribunales intermedios, como las cámaras federales de apelación que proyecta la mayoría, que no harían sino complicar mas el mecanismo de la administración con la creación de una tercera é inevitable instancia.

Es verdad que tal como reglamenta el despacho de la mayoría, las causas apeladas irán á las cámaras federales de apelación; pero también es cierto que los fallos de éstas no serán siempre decisivos, sino tan sólo en segunda instancia para todos aquellos asuntos que, en el concepto mismo de la comisión en mayoría, por su naturaleza ó por su importancia no puedan substraerse absolutamente del conocimiento de la corte suprema, á la que tendrían que ir en última instancia.

Como si no fuesen ya bastantes los que tenemos por razón de la ley de 1863, vendrían por la sanción del despacho de la mayoría de la comisión á aumentarse más los casos de una tercera instancia que, lejos de acelerar la tramitación, no haría sino hacer más onerosos los juicios y retardar más la solución definitiva de ellos, contrariamente al verdadero concepto, al ideal de una buena administración de justicia, que debe ser rápida y barata.

Dándose cuenta de este grave inconveniente, la comisión ha creído poder orillar la dificultad limitando los casos de tercera instancia; pero lo ha hecho en forma tal, señor presidente, que en mi opinión viene á comprometer el precepto constitucional relativo á la jurisdicción apelable de la corte,—y aquí

viene la primera objeción relativa á su inconstitucionalidad.

Por la limitación que establece el proyecto, lejos de constituir la regla general la apelación ante la corte suprema, vendría, en realidad de verdad, á ser la excepción, contrariamente al texto y al espíritu del artículo 101 de la constitución, que quiere establecer el conocimiento de la corte en todas las causas del fuero federal, sin más limitaciones que aquellas que la ley, excepcionalmente, substraiga de su conocimiento.

Por más que los principales publicistas de la unión norte americana han reconocido el poder discrecional del congreso para definir y reglamentar la facultad apelable de la corte suprema, con todo, el congreso de aquella gran nación no se creyó autorizado para privar á la corte suprema del conocimiento de los asuntos del fuero federal, y reglamentó los tribunales inferiores de tal manera, que la corte viene á entender de todas esas causas sin más limitaciones que las relativas á la importancia del asunto, por el poco valor de lo litigado ó por la insignificancia de la pena.

Y con esta reglamentación, señor presidente, están conformes aun aquellos publicistas de opiniones más avanzadas, como Kent y Story, en reconocer la facultad discrecional del congreso, porque reconocen el sabio espíritu que presidió el establecimiento de la jurisdicción por apelación de la corte suprema.

Por consiguiente, puedo citar estas opiniones, en la confianza de que no sean tachadas de parciales.

«Todos los casos enumerados de competencia federal, dice Kent, son aquellos que conciernen á la seguridad, paz y soberanía de la nación ó que suponen que los vínculos, preocupaciones, celos é intereses del estado pueden á veces obstruir ó restringir la regular administración de la justicia. La facultad apelable en todos estos casos está fundada en los claros principios de política y sabiduría y se la considera indispensable para llenar eficazmente los grandes y benéficos fines de la constitución. Es igualmente necesaria para preservar la unidad de decisión en todos los Estados Unidos sobre todos los asuntos dentro de las condiciones de la constitución, pues los males de las interpretaciones opuestas y de las decisiones contrarias, en los diversos estados, sobre todos estos puntos de concernimiento general, serían deplorables».

Y bien, señor, presidente, como se ve

por la opinión de este autor, si tal importancia tiene y tal sabiduría envuelve la jurisdicción por apelación de la corte suprema, ¿por qué razón, digo yo, habrían de excluirse de ella totalmente, como lo hace el despacho de la mayoría de la comisión, la mayor parte de las causas del fuero federal genéricamente enumeradas por el artículo 100?

Creo, señor presidente, que el verdadero propósito de ese artículo es el de establecer como regla general, imperativa, el que la corte suprema conozca de las causas apeladas en todos los casos del fuero federal, sin otras excepciones que aquellas que pueda el congreso, por leyes reglamentarias, introducir dentro de cada género de esas mismas causas enumeradas por el artículo 100 de la constitución.

Por consiguiente, con este criterio, con esta interpretación del artículo referido, y siendo, por otra parte, sabido que, ya sea en su acepción general ó en la jurídica, la regla rige la generalidad de los casos para que es establecida, y la excepción sólo los pocos excluidos de esa generalidad, es forzoso concluir que el congreso, en uso de su facultad reglamentaria, no puede limitar la jurisdicción apelatoria de la corte, sino por muy pocas excepciones, y ellas mismas dentro de los mismos casos genéricamente enumerados en el artículo 100, á fin de concordar de esa manera con el texto y el espíritu del artículo 101 mencionado.

Con esta inteligencia y de acuerdo, al parecer, con las prácticas de la Unión norteamericana, la primitiva ley de organización de la justicia federal de 1858 no limitó la facultad apelable de la corte suprema sino según el valor é importancia de la cosa litigada, y lo han hecho así más tarde las de 1862 y 1863 y otras particulares.

Sería explicable la organización que la ley del 58 estableció, creando las cortes de circuito con jurisdicción originaria en unos casos y apelada en otros, pero haciendo siempre recurribles sus fallos para ante la corte suprema, sin otra excepción que aquellos asuntos en que el valor de lo litigado no excediese de quinientos pesos, excluidas las costas.

Y digo que sería explicable, porque con todos los inconvenientes que en la práctica pudiera tener tal organización, ella encuadraría perfectamente dentro del artículo constitucional recordado, manteniendo la jurisdicción apelable de la corte con toda la extensión que se le

ha querido dar y que ha establecido el artículo 101 citado.

Como se ve, señor presidente, este sistema á que obedece el despacho de la mayoría es de todo punto de vista inaceptable; porque si se mantiene la reglamentación, en la forma en que se proyecta por dicho despacho, compromete el principio constitucional citado, y si, viceversa, se quisiera dejar á la corte toda la amplitud de jurisdicción apelable que ha querido acordarle la constitución, se tocará con el inconveniente de la tercera instancia, con la consiguiente retardación de la justicia, contrariando el propósito que la reforma tiene en vista, que es obtener una justicia rápida.

Entretanto, señor presidente, tengo la más profunda convicción de que lo proyectado en el despacho de la minoría de la comisión no introduce mayores innovaciones al estado actual de cosas: conserva el carácter actual de unidad de la suprema corte, y se ajusta más estrictamente á la letra y al espíritu de la recordada cláusula constitucional, relativa á la facultad apelable, de la que ha dicho Kent, con verdad, «es la que reviste á ese alto tribunal de la mayor dignidad y eficacia, y lo hace un objeto constante de atención y solicitud de parte de los gobiernos y del pueblo de los diversos estados».

Con la ampliación del número de magistrados de la suprema corte para que, desdoblándose en salas, conozca de todos los casos de apelación, se mantiene el carácter inalterable de unidad que la constitución ha querido darle; se mantiene el espíritu de cuerpo con que ella existe actualmente y sin mengua de una sóla de sus atribuciones.

Se mantiene la unidad por razón de la presidencia que lleva la dirección de todo el tribunal, de toda la corte suprema de justicia; se mantiene por razón de la superintendencia que esta ejerce sobre toda la administración de justicia nacional, y finalmente, porque constituida en corte plena, ó por lo menos con mayoría absoluta de sus miembros, vendría á conocer en todas aquellas causas de jurisdicción originaria establecida por la constitución y en aquellas que, como fiel y supremo intérprete de la misma constitución, de las leyes de la nación y los tratados con las potencias extranjeras, está llamada á mantener la uniformidad de jurisprudencia.

Por otra parte, no hay disposición

alguna en la constitución que obste á que el congreso, con la facultad reglamentaria que le confiere el artículo 101, divida la corte en varias salas, á fin de que conozcan de todas las causas apeladas. Siempre será la corte suprema la que entienda y decida de todas ellas por una parte de sus miembros constituidos en tribunal, de acuerdo con la ley reglamentaria, y se habrá conseguido que, dividido equitativamente el trabajo entre las tres salas, se obtenga la más pronta solución de todas las causas apeladas, con más rapidez todavía de la que se conseguiría con dos cámaras de apelaciones, por más que se ha argüido lo contrario en el seno de la comisión, pues más adelante he de probar que esas objeciones no nacen sino de un error de observación.

Debo hacer notar también que las salas, por espíritu de solidaridad, tratarán de inspirarse siempre en la jurisprudencia consagrada por la corte suprema federal, aun en aquellas causas regidas por las leyes comunes. Y, como es de desear el mantenimiento de esa uniformidad de jurisprudencia, no sólo por el prestigio de la autoridad judicial, sino también en atención á nuestra unidad de legislación substantiva, siendo comunes para toda la nación los códigos civil, comercial, penal y de minería, el proyecto que patrocino provee á ese propósito y establece el recurso de revisión para los raros casos, que pudieren ocurrir, en que esas salas se apartasen de la jurisprudencia consagrada por la suprema corte ó la sentaren contradictoria por decisiones contrarias.

Aún más: si bien por nuestro régimen institucional, los tribunales de provincia, como la justicia ordinaria de la capital, están llamados á pronunciarse sobre los casos regidos por la legislación substantiva con tanto ó igual derecho que la corte suprema, sin embargo, señor presidente, es un hecho constante, puede afirmarse, que esos tribunales, por el respeto que les inspira la suprema corte, por el prestigio que le da el carácter de más alto tribunal de la nación, tratan siempre de inspirarse en la jurisprudencia establecida por ella, no solamente en los casos de doctrina legal y constitucional, sino también de interpretación y aplicación de las leyes de fondo. De esta suerte, pues, se tendría la ventaja de tender á la unidad de la jurisprudencia.

Propiciando esta organización de la corte suprema con la estructura que

le da mi proyecto, un distinguido jurista argentino, el doctor Pedro Nolasco Arias, ha publicado el 17 de agosto del corriente año un interesante artículo doctrinario en *El País*, en el cual sostiene que la mente y propósitos del artículo 101 de la constitución es mantener la intervención de la corte suprema en todos los casos del fuero federal, enumerados en el artículo 100, ya en defensa de los derechos individuales, ya también de la unidad de la doctrina y de la jurisprudencia legal y constitucional; y dilucidando el punto, hace estas interesantísimas observaciones, que voy á permitirme leer, porque abonan eficazmente la tesis que vengo sosteniendo: «Que esta unidad debió ser tenida en cuenta, dice, y especialmente contemplada por los constituyentes argentinos, no puede ponerse en duda, dado el carácter fundamentalmente unitario por ellos impreso á nuestra legislación sustantiva ó de fondo. En los Estados Unidos del Norte esa unidad de legislación no existe, y de allí proviene que tampoco se haga necesaria ni pueda surgir la unidad de jurisprudencia y que por lo tanto pueda allí romperse la condición esencial de ella é instituirse las cortes intermedias, que tan desgraciada y desacertadamente tratamos de imitar, con evidentes y graves peligros, de difícil corrección en el porvenir.»

Y agrega en otro párrafo el doctor Arias: «Bien conocidos son los antecedentes históricos que determinaron el alejamiento, en el punto referente á la unidad de legislación, del modelo del norte, seguido por nuestros constituyentes, y la tendencia clara y evidente que los animó, de aproximarnos por medio de ella á la unidad política, tan relajada y débil en los pueblos cuya representación ejercían, tras largos años de anarquía, de despotismo y desorganización. Imperdonable sería al presente el error en que incurriríamos rompiendo uno de los vínculos más fuertes de esta nacionalidad aún incipiente, al destruir la unidad de jurisprudencia en un país regido por ella y substancialmente por una misma legislación de fondo desde los remotos tiempos de la conquista.»

Habiendo demostrado, señor presidente, las ventajas que reportaría el proyecto que he tenido el honor de someter á la consideración de la honorable cámara, voy á pasar á considerar las objeciones formuladas contra él.

La única objeción que se hizo en el

seno de la comisión contra la practicabilidad de este proyecto fué que las dos cámaras de apelaciones despacharían con más rapidez que las tres salas en que estaría subdividida la corte, por cuanto éstas tendrían que distribuir su tiempo y atención entre las causas de su exclusiva competencia y aquellas en que, según los artículos 5.º y 6.º del proyecto, serían llamadas á conocer, formando tribunal pleno ó por lo menos con la mayoría absoluta de sus miembros. Pero esta objeción carece de fundamento y parte de un error de observación, como dije antes, y como se vencerá la honorable cámara en presencia de los datos estadísticos que voy á suministrarle.

Según una estadística que se registra en un interesante opúsculo publicado por el doctor Goytia, juez federal del Rosario, que propicia una estructura análoga á la que proyecto para la corte suprema federal, de los 77 volúmenes de fallos de ésta correspondientes á los primeros treinta y seis años de su existencia, hasta el 31 de diciembre de 1899, no habría sino 243 causas que estarían comprendidas en los artículos 5.º y 6.º del proyecto, y en las cuales serían llamadas á conocer las salas que constituyen el tribunal.

Según otra que debo á la deferencia del doctor Frias, secretario de la suprema corte, de dos mil y tantas causas que quedaban pendientes ante dicho tribunal el 31 de diciembre de 1900, no corresponderían á la corte plena, según mi proyecto, sino las siguientes: por jurisdicción originaria, 144; por jurisdicción de apelación, inclusive las cuestiones de competencia, alrededor de 30, ó sea un total, más ó menos, de 170 causas.

Estos datos, que demuestran una entrada en la corte suprema de cerca de 400 causas de la naturaleza á que me he referido, dan un promedio de 11 á 12 causas por año.

Bien se comprende, entonces, que una vez resuelto el número relativamente pequeño de esas causas pendientes, en lo sucesivo, de ninguna manera podrían ser motivo de rémora, para el libre juego y funcionamiento de las salas, los casos que, de tarde en tarde, pudieran ocurrir y que requirieran el conocimiento de la corte plena, de acuerdo con los artículos 5.º y 6.º

Precisamente, señor presidente, el ser la organización más eficaz y más práctica la que propongo, es la conside-

ración que ha determinado su adopción en los países más adelantados y civilizados de la Europa. La tiene Francia desde hace más de un siglo para su tribunal de casación; la han adoptado Alemania, Bélgica, Inglaterra, España, é Italia. Entre los países americanos la tienen Méjico, Honduras, Venezuela, Perú y Brasil en el distrito federal de la capital.

En 1886 ha sido también proyectada por Wilson para los Estados Unidos, suprimiendo las cortes de circuito y creando la suprema corte de diez miembros, subdividida en dos salas de cinco.

Nosotros tenemos numerosos precedentes que podemos invocar.

Córdoba, conceptuado el segundo centro intelectual de la República, con un foro ilustradísimo, no obstante las diversas revisiones hechas en su ley de organización de los tribunales, y alguna de reciente data, ha mantenido invariable la establecida el año 75, que crea un tribunal supremo subdividido en dos salas: una para los asuntos civiles y otra para los comerciales, criminales y correccionales.

Esta misma ley ha servido de base para la última reforma hecha en Santa Fe, previo estudio de una comisión de abogados de su no menos ilustrado foro: el tribuna superior de Santa Fe, como la cámara de apelación de la segunda circunscripción, están compuestos respectivamente de un presidente y dos salas de tres vocales cada una.

Esta misma cámara sancionó en 1895 para la justicia ordinaria de la capital una cámara compuesta de diez miembros, en lo civil y comercial, la que se subdividiría en tres tribunales de tres miembros para el conocimiento de los recursos contra resoluciones interlocutorias y sentencias definitivas en juicios sumarios, y en dos tribunales, de cinco cada uno, para conocer los recursos de las sentencias definitivas de los juicios ordinarios.

Ese proyecto, que fué presentado por el poder ejecutivo, fué defendido en esta cámara por nuestro distinguido colega, el doctor Bermejo, entonces ministro de justicia.

Conceptuando como muy buena y eficaz esta organización, el poder ejecutivo ha insistido en aconsejar su sanción en los últimos proyectos presentados al honorable congreso sobre organización de los tribunales federales y los ordinarios en la capital.

Y, aunque contrariando el procep-

to de la ficción parlamentaria, que una cámara no debe saber lo que hace la otra, séame permitido traer un recuerdo, y es este: que en la comisión respectiva del honorable senado existe un despacho por el cual se proyecta análoga organización á la que yo sostengo para la suprema corte federal. Ese proyecto fué formulado por el doctor Calixto de la Torre, cuya autoridad en esta materia es digna del mayor respeto por su reconocida competencia y por su larga práctica en la alta magistratura federal.

Y tengo entendido, señor presidente, según informes de algunos señores senadores, que esa era la idea dominante en el senado. De manera que si esta cámara la acogiese igualmente, tendríamos esta ventaja: tener pronto el despacho del asunto por la otra cámara, con inmenso beneficio para el país, que no anhela otra cosa que estas reformas.

En cuanto á la otra objeción que hacía el señor miembro informante de la mayoría de la comisión, que se acerca más la justicia á los litigantes, me parece, señor presidente, que carece de fundamento.

En primer lugar tenemos que no se acercan las cámaras á los litigantes, por que las dos deben tener, según el proyecto, su asiento en esta capital. Por otra parte, suponiendo que no tuvieran su asiento en esta capital, que se tratara de descentralizarlas, que se llevarsen las cámaras de apelación á las provincias, no se haría más barata la justicia ni tampoco más rápida, porque lejos de tener las causas apeladas una segunda instancia, vendrían á tener una tercera instancia ante la corte suprema — la que ya he demostrado que es imprescindible — con las erogaciones y mayor retardo en su decisión que traería aparejadas.

Voy á terminar; veo que me he extendido demasiado y pido disculpa á la cámara si la he molestado. (No! no!)

Creo haber demostrado, señor presidente, que el proyecto que sustento no tan sólo responde á la aspiración general del país, de garantizar una justicia rápida, sino que también respeta y consulta los sabios propósitos que tuvo la ilustrada asamblea constituyente al establecer ese alto tribunal de la nación llamado suprema corte, cuya naturaleza define Story, concordando con las opiniones que he leído de Kent, y dice: «La constitución ha establecido sabiamente

una corte suprema, á fin de tener la uniformidad de decisiones en todas las causas, cualesquiera que sean, pertenecientes al departamento judicial, sea en materia de ley común, de equidad, de almirantazgo ó de presas, sea en materia de leyes municipales (esto es, particulares del país), constitucionales ó internacionales.»

En compañía, pues, de tan respetables autoridades y con los antecedentes legislativos que he citado, creo haber podido llevar el convencimiento á la honorable cámara de que el proyecto que defiende es más aceptable que el de la mayoría de la comisión, exento de los inconvenientes que este presenta. Así es que pido á la honorable cámara quiera aceptarlo con preferencia, si quiere hacer algo práctico, y aun alejar todo motivo de desacuerdos por celos regionales, que ha tenido la virtud de levantar el despacho de la mayoría, al fijar para asiento de las cámaras de apelación la capital de la República.

Saben muy bien los señores diputados los trabajos que se han dejado sentir entre las diferentes representaciones del litoral y del interior en ese sentido, y correríamos el peligro con estos celos de hacer fracasar la reforma, como ya aconteció otrora, defraudando así un anhelo nacional.

Nada más, señor presidente.

Sr. Ministro de justicia—Pido la palabra.

Sr. Barraquero—Pido la palabra.

Sr. Presidente—La había pedido anteriormente el señor ministro.

Sr. Ministro de justicia—Puede hacer uso de ella el señor diputado por Mendoza.

Sr. Barraquero—No, señor ministro; iba sólo á hacer uso de la palabra para que la cámara no quedase bajo la impresión de las que acaba de pronunciar el señor diputado por Santiago del Estero; pero tengo el mayor placer en que el señor ministro hable primero.

Sr. Ministro de justicia—Señor presidente: justamente esperaba que el señor diputado por Mendoza, doctor Barraquero, hiciera uso de la palabra como autor del proyecto que se encuentra en discusión.

El poder ejecutivo ha concurrido, interesado en el despacho de este asunto, á los trabajos que empeñosamente ha emprendido la comisión de justicia, y aceptado por intermedio de la intervención de su ministro la resolución de la mayoría. Creo, pues, que no es inopor-

tuno que exprese algunas razones que tiendan á justificar esta adhesión y á contradecir en parte las conclusiones á que arriba el señor diputado por Santiago del Estero, autor del despacho de la minoría de la comisión.

Puede, señor presidente, reasumirse en dos puntos esenciales el informe que ha producido tan brillantemente el señor diputado.

El primer punto podríamos denominarlo constitucional, y el segundo, si es posible decirlo así, utilitario, en el sentido de los beneficios que puede producir uno ú otro organismo para los fines de la justicia.

Con respecto al primer punto podría decir, señor presidente, que no esperaba que el señor diputado arribase á conclusiones tan absolutas, hasta negarle al congreso la facultad de establecer estos tribunales intermediarios entre la suprema corte y los jueces federales.

Desde que se viene suscitando esta cuestión, hace próximamente doce años, no he visto fundamentalmente negada esta facultad, y casi todas las iniciativas, tanto de los señores diputados, como de los miembros de la otra cámara, tanto las iniciativas del poder ejecutivo como aquellas que han emanado de las comisiones de que se ha asesorado para la formación de distintos proyectos, parece que han estado conformes en reconocer la facultad del congreso para determinar la forma como había de hacerse la creación de los tribunales inferiores á que se refiere la constitución. La constitución ha creado la suprema corte y ha dejado al congreso la facultad de crear los tribunales inferiores.

Con arreglo á esta facultad, en la primera organización que se hizo de la justicia federal se crearon los jueces de sección en cada una de las provincias y, como ha dicho muy bien el señor miembro informante de la mayoría de la comisión, desde aquella fecha no ha sufrido este organismo otra modificación que la creación de dos juzgados en la capital.

Es cierto, señor, que el primer congreso que dictó la ley para el funcionamiento de la justicia federal, le dió conocimiento á la corte de todos los asuntos de ese fuero, con excepción únicamente de aquellos que por su ínfima cuantía no debían ser de la preocupación de este alto tribunal.

Cuando se reunió la convención en el estado de Buenos Aires, el año 1860, y propuso varias reformas para que fue-

ran consideradas en el congreso nacional, entre ellas estaba comprendida también la que se refiere á la justicia federal. En esa enmienda se quería, señor presidente, que la corte se compusiese solamente de cuatro miembros y un procurador general, con asiento solamente una vez en el año en la capital, y con jurisdicción apelatoria en todas las provincias.

La comisión de la asamblea nacional á cuyo estudio pasó esta reforma, no la encaró en su estudio fundamental y apartándola, por decir así, consignó el organismo de la justicia federal tal cual hoy existe en la constitución nacional, esto es, creando la suprema corte y dejando al congreso la facultad de crear los tribunales inferiores.

He dicho anteriormente, y lo repito ahora, que con arreglo á esta facultad el congreso creó solamente los juzgados federales. Y me permito llamar la atención sobre las expresiones de que se sirvió aquella comisión para ilustrar el informe con que acompañaba la reforma.

Ella decía: no es posible crearlo todo de una vez; es necesario ir por partes. Hoy creamos los jueces federales, mañana estableceremos las otras cámaras ó las otras cortes de circuito, tribunales intermediarios entre los jueces federales y la suprema corte, para que respondan á las necesidades ulteriores del país.

Hoy, señor presidente, vamos completando la institución de la justicia federal creando estos tribunales que aquellos hombres de la confederación, cuyo espíritu cuando dictaban las leyes orgánicas era tan previsor y con tanto sentido práctico, ya preveían para las épocas futuras, señalando la necesidad de ir poco á poco complementando este organismo, lo que no es posible hacer en un día de modo que responda á las necesidades de todas las épocas. (*Muy bien!*)

La comisión en mayoría ha comprendido que no es posible que subsista la suprema corte con la tarea que se le asignó hace ya cerca de cuarenta años: la población ha crecido, las industrias se han desenvuelto, la riqueza se ha esparcido por todo el territorio de la República, la multiplicidad de las causas es enorme, se ha formado en los departamentos de la corte una montaña que es necesario deshacer. ¿Cómo? Creando las cortes intermediarias, previstas é indicadas ya en distintas ocasiones, entre la suprema corte y los jueces

federales, para que ayuden en la magna tarea á este alto tribunal, tomando conocimiento de aquellos asuntos que por su naturaleza sencilla y simple no vengán á comprometer ningún principio fundamental de gobierno ni las relaciones de los poderes del estado, de las provincias con la nación, de la nación con las naciones extranjeras. Para eso si está la suprema corte como poder político superior á todos los tribunales que en adelante se crean con el transcurso del tiempo para llenar las necesidades ordinarias de la justicia.

Señor presidente: si la constitución ha marcado en una forma preceptiva cuáles son las causas que deberán corresponder á su jurisdicción originaria, llama la atención que diga á renglón seguido que la jurisdicción apelatoria será determinada según las reglas y según las excepciones que establezca el congreso, y fíjese bien la cámara sobre esta dualidad de términos de que se sirve: según las *reglas* y según las *excepciones* que prescriba el congreso. ¿Por qué no dijo pura y simplemente: conocerá de todos las causas de jurisdicción apelatoria que correspondan al fuero federal? Era sin duda porque quería dejar cierta flexibilidad de criterio, porque quería dejar cierta aptitud al congreso para establecer el régimen judicial, para ir complementándolo con arreglo á las necesidades públicas, para no sacrificar el bien general por una mera ficción ó por un concepto abstracto como parece entenderlo el señor diputado.

Veamos ahora, cual de los dos sistemas, si el de la mayoría ó el de la minoría sirve mejor á los fines de la justicia.

Desde ya podemos anticipar que no es posible creer que la constitución haya querido privar al país del organismo judicial que mejor respondiese á sus necesidades.

El señor diputado hacia con habilidad la demostración de la sencillez del mecanismo según el cual habían de dividirse las causas entre las salas en que se dividiría el gran tribunal constituido según su proyecto con el nombre de suprema corte, y manifestaba que en el desenvolvimiento de esta acción relativa de los distintos círculos en que se descompone la gran corte, había de haber más unidad, había de haber mayor autoridad en su acción superior sobre los demás tribunales, de esa corte. El señor diputado se esforzaba por hacer

comprender que la acción de una sala constituida de tres miembros era la expresión del conjunto de la suprema corte, y que no podía haber aplicación distinta de doctrinas entre una sala con la otra.

No, señor presidente. No comprendo que pueda llegarse á esta conclusión, de que se ha de mantener mayormente el espíritu de unidad en un tribunal que se divide en salas para hacer el despacho de todos sus asuntos, que en un tribunal que se conserva sobre todos los tribunales de menor jerarquía en su número ordinario, tal como fué constituido en los orígenes de la organización de esta justicia.

No quisiera, señor, ser muy extenso y realmente tendría que detenerme un poco, si quisiera ocuparme de todos los argumentos de sentido práctico que ha hecho el señor diputado. No puedo seguirlo; por que no deseo tomar mayor tiempo á la cámara y porque juzgo inaplicable, por otra parte, la doctrina y la práctica americana á nuestras necesidades, que han abonado tan conocidos tratadistas...

Sr. Argañaraz—Y que son partidarios de los poderes discrecionales del congreso, que defiende el señor ministro.

Sr. Barraquero—Pero no dicen lo que el señor diputado ha dicho.

Sr. Argañaraz—He leído...

Sr. Barraquero—Luego le voy á explicar cómo ha leído mal el señor diputado.

Sr. Ministro de justicia—El organismo que la comisión en mayoría propone es sencillísimo; no tiene absolutamente ninguna dificultad para su desenvolvimiento. Se establece con perfecta precisión cuáles son los casos que fallados en primera instancia van á conocimiento de estas cámaras intermediarias, cuya ubicación se determina desde ya y por ahora que ha de ser la capital de la República, por una doble razón: primera, porque esa ubicación corresponde al movimiento de las causas que se inician en esta capital, que es el centro de atracción y de relación con toda la República, y porque tienen dichas cámaras la primera tarea de deshacer el obstáculo que impide la regular y libre circulación de las causas que deben entrar y salir de la suprema corte.

De manera, pues, que dejando el derecho de completar la réplica al señor diputado por Mendoza y la tarea de rectificar algunas de las citas que ha hecho

el señor diputado de autores norteamericanos, creo haber cumplido mi deber con haber hecho esta ligera exposición para adherir en nombre del poder ejecutivo al despacho de la mayoría de la comisión.

Sr. Barraquero—Pido la palabra.

Sé muy bien, señor presidente, que esta cámara no está muy deseosa de oír discursos y que no son oratorias lo que necesita el país, sino leyes prácticas y fundamentales que satisfagan sus necesidades más apremiantes. Así es que me limitaré á contestar dos ó tres de las observaciones que el señor ministro no ha contestado y que ha hecho, á mi proyecto, el señor miembro informante de la minoría.

En primer lugar, los autores, constitucionalistas ó juristas, que ha citado el miembro informante de la minoría de la comisión, no se refieren absolutamente al derecho común, á los asuntos del fuero ordinario. En Estados Unidos como aquí, la jurisprudencia que establece y mantiene la corte suprema es la jurisprudencia para los asuntos del fuero federal, del fuero constitucional; aquí como allí el poder judicial no tiene un rol simplemente judicial, como lo tiene en las naciones europeas: la institución americana del poder judicial es una institución verdaderamente nueva en el mundo; es una institución, como muy bien lo ha dicho el señor ministro, de orden político. La corte federal no se creó especialmente para fallar los asuntos del fuero común, para mantener la jurisprudencia de los códigos civil, de comercio y de minería; no, señor presidente... Esa corte federal está para mantener incólumes los principios de la constitución; para mantener dentro de su órbita respectiva á los poderes del estado. Cuando Story y Kent se refieren á la jurisprudencia que debe implantar la suprema corte, se refieren á las causas de justicia federal, de orden constitucional.

Y no tengo más que hacerle esta reflexión al señor diputado. Nuestra constitución, si bien ha hecho una excepción al principio federativo y ha establecido que no sean los estados argentinos los que dicten los códigos civil, de comercio y de minería, sino que sea el congreso, haciendo una desviación á los principios del federalismo, ha establecido también que son las provincias las que aplicarán esos códigos en los casos del fuero común. ¿Y cómo podría entonces la suprema corte mantener la unidad de la ju-

risprudencia en estos asuntos? De ninguna manera; y como dijo muy bien el señor ministro, el artículo 1.º del proyecto salva absolutamente la dificultad, puesto que dice que la corte suprema conocerá originaria y exclusivamente de las causas mencionadas en el artículo 101 de la constitución nacional, etc.

Quiere decir, pues, que lo que el congreso hará y lo que la mayoría de la comisión propone, es lo que ha hecho ya en distintas ocasiones, es decir, reglamentar el precepto constitucional, dejando á la corte los asuntos que á ella exclusivamente corresponden por mandato constitucional.

Debo hacer este recuerdo á la cámara. En 1878 se dió la ley, que está vigente, modificando la del 63 que establecía que las causas entre ciudadanos argentinos y extranjerios correspondieran á la justicia federal y por excepción, es decir, cuando no alcanzaran á un *quantum* de quinientos pesos, correspondieran á la justicia ordinaria, á la justicia de paz. Y yo digo; si el congreso tiene facultad para disponer que las causas de orden federal entre un argentino y un extranjero, cuando sean de quinientos pesos abajo, han de corresponder á la justicia de paz, ¿pudo ó nó haber dicho que también debían corresponderle las de dos mil, tres mil ó cuatro mil pesos? Es indudable que sí; quiere decir entonces que no hay el temor de inconstitucionalidad que el señor diputado entendía. Esa ley del 78 está vigente.

Pero hay un hecho más reciente, señores diputados. El año 95 ese senado á que el señor diputado se refiere, amenazándonos con su actitud contraria al proyecto que la mayoría de la comisión aconseja, ese año sancionó una ley creando cortes de circuitos, asunto que, como se sabe muy bien, quedó en esta cámara porque no se discutió dentro del término reglamentario.

Se ve, pues, cómo los recuerdos del señor diputado son completamente equivocados, contraproducentes á la tesis que sostiene. En primer lugar, ya hay pronunciamientos del congreso argentino, diciendo que puede reglamentar preceptos constitucionales, puesto que existe la ley del 78, y hay ya un pronunciamiento del senado de la nación, en el proyecto del 95.

Entrando ahora á algunos detalles, el señor miembro informante de la minoría nos ha dicho que por su proyecto

se facilitaría el movimiento de la justicia federal.

Creo que está en gravísimo error. Según la estadística, con su proyecto la corte quedaría con mil asuntos, y por el proyecto de la mayoría de la comisión la corte quedaría con trescientos asuntos más ó menos; pero, como ha dicho muy bien el señor ministro, ¿cuál es el objeto que se propone el congreso argentino al crear estas cámaras de apelación, al promover esta reforma de la justicia federal? Pero, señor! que las causas se fallen; que haya justicia, porque hoy, hablando en propiedad, no hay justicia. Esta no es una ley simplemente para reorganizar un tribunal ó mejorar la administración de justicia, no: esta ley es para dar la justicia federal que hoy no existe, porque yo no creo que puede decirse que existe justicia en un país donde un asunto de juicio ejecutivo, que dede durar tres meses, dura años, ó en que un juicio de interdicto, que puede durar á lo sumo ocho días, dura hasta ocho años.

La corte tiene dos mil y tantas causas para sentencia y no podrán ser fallados sino en doce ó catorce años, despachando los que humanamente sea posible.

Entonces yo pregunto: ¿se puede sostener que una corte compuesta de nueve miembros, dividida en salas, puede ser á la vez corte suprema para las causas que correspondan á la corte y cámaras ó salas para las causas de apelación?

Naturalmente que no; mientras la corte dividida en salas está estudiando los asuntos que se refieran á esas salas, en ningún caso puede, por ningún arte, por ninguna invención, á la vez, reunirse y ser corte para fallar los asuntos que á la corte corresponden. Es pues, un mecanismo que no puede dar buen resultado.

En algunas provincias—no sé lo que ha sucedido en Córdoba, pero sé lo que sucede en Mendoza: allí tenemos ese sistema y la justicia superior no puede administrarse con regularidad—sé que la prensa está clamando por una reforma constitucional, precisamente para modificar esa administración judicial.

Se ha dicho también que este asunto no debería tratarse, porque el país no está en estado de gastar en reformas judiciales; y hasta se ha llegado á preguntar si por este proyecto se creaban

fondos especiales para los gastos que demande.

Yo me siento sorprendido y tengo verdadera pena cuando me parece que el congreso argentino no da á estos asuntos toda la importancia, toda la gravedad que ellos tienen. Y ya que se hace una observación de orden financiero, diré, á este respecto, una consideración de orden económico.

¿Acaso vamos á salvar la situación del país haciendo tan solo economías en la sopa del loro? ¿Acaso vamos á salvar la situación del país suprimiendo en absoluto las obras públicas y haciendo simplemente reducciones en el presupuesto? No, señor presidente. El país, salvará protegiendo á sus industrias impulsando el cultivo de sus tierras, impulsando todo su orden económico; y ya sabemos que no hay motor más poderoso que mueva todo eso, que el dinero, que el capital que este país no tiene. Somos un pueblo joven, que no tiene capital propio y que debe todo su desenvolvimiento al capital extranjero.

Y yo pregunto: ¿puede venir el capital extranjero á trabajar nuestra tierra, á mover nuestras industrias, en un país donde el fallo de un juicio ejecutivo necesita diez ó veinte años? Pero es evidente que no! Si hay algo que está deteniendo el desenvolvimiento de este país, que constituye un cáncer, un mal dañino, es precisamente la falta de justicia. Y la prueba es evidente. ¿Como se explica que en Europa el interés del dinero oscile entre el 2 % y el 6 %, y en este país oscile desde el 6 % hasta el 24 %? Porque si bien es cierto que en la capital de la República hay un poco más de capital extranjero y hay bancos donde se puede obtener dinero al 6 %, en el resto de la República,—los señores diputados que vienen representando á las provincias lo saben,—el interés del dinero es del 12 al 24 %. En las provincias de Tucumán, de Córdoba, de Mendoza donde hay millones de hipotecas particulares; el interés oscila entre el 10 y 24 %. Y yo pregunto: ¿vamos á atraer capital extranjero á un país donde se necesitan veinte años para fallar un juicio?

Sería un absurdo. Por eso sostengo que no se puede hacer á mi proyecto una observación de orden financiero. ¡Pero qué importa ese gasto, ante los beneficios que reportará al país!

No hay, no puede haber, como he dicho, en este momento un asunto de mayor interés para el país. Como lo he dicho y lo repito, no se trata aquí de

crear una corte, de mejorar la justicia federal con reformas. No, señor. Se trata de dar la justicia á los que hoy no la tienen.

¿Qué no se ha reformado, en este país, desde el año 63 hasta la fecha? ¿Qué institución, qué organismo en el país, no se ha reformado y transformado cien veces desde esa fecha hasta hoy? Y, sin embargo, como han dicho muy bien el señor miembro informante y el señor ministro, todo lo que se ha hecho en materia de organización de la justicia federal, desde el año 63, es crear dos jueces federales.

La corte suprema que se creó en aquella fecha era para servir la justicia cuando la República no tenía más que un millón y medio de habitantes, y hoy tiene cinco. La corte tenía en aquella época, para fallar, doscientos ó trescientos asuntos por año, y hoy tiene dos mil; y si no tiene más es por la sencilla razón de que el público huye de la justicia federal.

¿Como se explica que el crédito personal tenga más aceptación y más simpatía y más respeto que el crédito hipotecario? Una buena firma, un nombre honorable, que va á un banco á pedir dinero, lo obtiene al 6, al 8 ó al 10 %; pero el individuo que no tiene ese crédito personal y que va á solicitar dinero con una propiedad que constituye una garantía más eficaz, no lo obtiene sino al 12 %! ¿Por qué? Porque el prestamista sabe que necesita pleitear durante ocho ó diez años para obtener la devolución de su dinero. Eso es una prueba evidente del desprestigio y ausencia de justicia en este país.

No voy á molestar á la cámara con mayores observaciones. La cuestión de que convenga más el desdoblamiento de la corte en cámaras de apelación es asunto nimio, es un punto de detalle. Lo fundamental es crear más tribunales para mejorar la justicia federal. Lo he dicho otras veces, lo repito ahora: la justicia federal no es justicia, es vergüenza federal, no obstante la honorabilidad y la actividad de los magistrados que están al frente de ella, pero es que no pueden hacer más de lo que humanamente es posible.

Sr. Argañaraz—Pido la palabra. Para una rectificación.

Siento no haber tenido la fortuna de hacerme comprender. Cuando he dicho que tenía mis dudas acerca de la constitucionalidad del despacho de la mayoría, ha sido en este sentido: no porque desco-

nozca las facultades del congreso para definir y reglamentar la jurisdicción apelada de la suprema corte, é introducir ciertas excepciones á ella, sino que he dicho que estas excepciones deben limitarse cuando más respecto á la importancia de los asuntos, para que se mantenga en toda su extensión la jurisdicción apelable de la corte suprema y no aparezcan las cámaras federales de apelación conociendo de la mayor parte de las causas del fuero federal, excluyendo de su conocimiento á aquella, como resulta del despacho de la mayoría, en que se excluyen todos los casos regidos por las leyes substantivas, cuando el fuero no procede sino en razón de las personas, como también se excluye casi todas las causas de jurisdicción marítima.

Es á lo que me he referido al decir que era de dudosa constitucionalidad.

Sr. Ugarriza—Pido la palabra.

Creo indispensable incorporarme á este debate, porque la idea que he formado de los proyectos que se discuten es que han perdido de vista, en mi concepto, el objeto principal que se ha tenido en vista al formularlos.

Confirmame en mi opinión lo que se ha repetido de que es un hecho que sorprende: que desde el año 63 hasta la fecha, no se haya hecho variación ninguna en la ley de procedimiento y organización de la justicia nacional.

Efectivamente, la ley del 63 es una ley vetusta, si se quiere; pero es un traje hecho sobre molde, cortado por mano maestra. Se han esbozado y aun diseñado allí los fines y propósitos que ella tuvo; y aun cuando sea verdad que es necesario reformarla, también lo es que en ella están consignados los principios que guían á esta justicia nacional, creación única de los Estados Unidos y también de nosotros, razón por la que no encontramos antecedente alguno al respecto en los demás países que nos pueda servir de modelo.

La justicia de la constitución es el elemento que entra como lastre en la composición de nuestro sistema, y es por consiguiente el de mayor peso específico, porque realmente está destinada, no á promover las nuevas adquisiciones del progreso, sino á mantener incólumes las conquistas realizadas como fundamento de los derechos de los ciudadanos; y bajo ese aspecto, la idea de los puritanos, de los sabios y de los constitucionalistas ha sido hacer materia sólida y resistente.

El hecho primordial que motiva la necesidad de una reforma, hecho incontestable y sobre el que me atrevo á afirmar que estamos todos de acuerdo, es que no solamente por la acumulación actual de causas, sino por el movimiento progresivo que se espera, la corte no podrá, en las condiciones de su actual organización, desempeñar su tarea y dominar el cúmulo de causas que le mandan en apelación los jueces federales.

Pero de aquí no se deduce en ningún concepto que haya de recurrirse al medio muy ensayado ya de crear nuevos tribunales intermediarios.

No voy á discutir la constitucionalidad ni el poder que tiene el congreso de crear estos tribunales: esto está fuera de toda duda. El número de tribunales intermediarios que se formen, es cuestión de utilidad. Pero debemos tener presente que es un principio también indudable el de que la suprema corte debe fallar todos los asuntos en que pueda estar comprometido algún principio constitucional, alguna cuestión de relaciones exteriores, y que estas cuestiones no se miden por la cantidad de dinero que puedan importar. Se comprende fácilmente que una cuestión por cientos de miles de pesos, puede depender de un artículo del código de comercio, y que una cuestión de unos pocos centavos, sobre un impuesto, puede afectar todo el sistema de la propiedad y quizás todo el sistema constitucional.

Por consiguiente, nunca nos puede servir de criterio la cantidad, sino la calidad de las causas.

Ahora bien; para establecer esta unidad y al mismo tiempo remover los inconvenientes por el cúmulo excesivo de las causas no encuentro que se haya acertado en ninguno de los proyectos, á pesar de que los creo perfectamente confeccionados como para producir la justicia recta, que sería una de las principales aspiraciones.

Debemos tener presente sobre todo esta circunstancia: la misión de los tribunales, en todos los demás países del mundo, estriba en la recta administración de la justicia, y á ese punto queda casi limitada su acción; por lo común, son dependientes del poder ejecutivo, que los nombra y remueve; por lo tanto, el tribunal que produce sentencia, dirimiendo rectamente la cuestión entre las partes, ha concluido su misión. Pero la corte suprema de los Estados

Unidos, como la nuestra, no solamente es un tribunal de derecho que va á resolver la cuestión entre las partes, sino que va á dar la interpretación recta de la constitución: va á hacer, si podemos decirlo así, la constitución viva y palpitante en todos los tiempos y en todas las emergencias, conservando en conjunto casi su mismo texto, pero sirviendo hoy como mañana á las necesidades de la serie creciente de nuestros progresos, cuyo último término escapa á la previsión humana.

Decía que habíamos olvidado el objetivo principal, y me confirmo más en que esto obedece á una tendencia general cuando comparamos las sentencias de los primeros tiempos de la corte con las de los actuales.

Debido al cúmulo de los asuntos, la corte últimamente parece que actúa bajo el principio de que su misión es únicamente resolver las cuestiones y resolverlas rectamente. Esta no es su única misión. Cuando en el proceso de las causas se promueva por los abogados cuestiones incidentales, muy interesantes bajo del punto de vista doctrinal; pero que la corte estima que su consideración no afecta la resolución del litigio, se prescinde de ellas. Bastaría abrir los fallos de la corte antigua, y encontraremos que cada sentencia de la corte primitiva, bajo el espíritu de esa ley del 63, es completamente doctrinal; entra en todos los detalles; examina todas las cuestiones que se han planteado, da su opinión sobre ellas y las resuelve. Exactamente lo mismo que cuando se toma las sentencias de la suprema corte de los Estados Unidos, que cada una de ellas es un tratado sobre todas las cuestiones que se ha propuesto. En mi concepto podría encontrarse otro medio para obviar la dificultad que presenta el cúmulo de causas, y este medio no lo encuentro en los proyectos puestos á consideración de la cámara.

Si bien no participo de la opinión de que el congreso carece de facultades constitucionales para crear nuevos tribunales de apelación, creo sin embargo un punto de la mayor importancia el que fuera posible prescindir de este medio por lo que hace á la economía y muy especialmente á la expedición de las causas.

Las cortes de circuito, las cortes de distrito en los Estados Unidos, tienen un carácter especial que nosotros quitamos á la nuestra. Los Estados Uni-

nidos están divididos en circuitos y distritos donde hay varios jueces federales y éstos forman las cortes de distrito con otros jueces y para formar la corte de circuito va un miembro de la corte.

De manera que una causa va siempre en apelación á los jueces federales que han intervenido en ella; á las cortes de circuito, va un miembro de la corte; y así entran las causas á la corte, después de haber intervenido en ellas los jueces federales y un miembro de la corte.

Porque lo único que se busca es la unidad de la legislación, y se consigue haciendo que ninguna causa pase sin pedir licencia á un miembro de la corte que establezca el verdadero sentido y la unidad de la legislación.

Por medio de las cortes de circuito especiales que queremos hacer, y que no tienen atingencia ninguna entre sí ni con el sistema general, vamos á hacer líneas divisorias completamente separadas.

El mismo inconveniente tienen las salas, porque cada una es diferente de la otra y cada asunto se fallará según la competencia de una ú otra sala, porque no hay punto de contacto entre una y otra sala. Sería lo mismo que crear las cortes de circuito propuestas.

Ahora la cuestión es, establecer la unidad salvando la acumulación: es decir buscarla en lo único que es posible: en la división del trabajo. Entonces, si por ser muy caro no podemos hacer las cortes de circuito ni las de distrito, que exigen un movimiento, un intercambio en los jueces, muy costoso y mucho menos una corte de circuito de apelación, que cuesta enormemente caro, cuando no hemos probado otros medios que son más aceptables, yo digo si hemos de hacer un simulacro para salvar la dificultad, podemos hacer exactamente lo que se hace con el cúmulo de asuntos que hay que despachar en el congreso.

¿Quién podría estudiar todos los asuntos que vienen al congreso?

Es necesario que se encargue su estudio á diferentes comisiones, las cuales los presentan después despachados á la cámara, sin que sea necesario que los diputados tengan que ir á revisar todos los papeles y antecedentes que han servido á la comisión para formular su dictamen; y la mayor parte de los asuntos pasan con un voto consciente siempre pero sin recurrir á los detalles. En la corte podríamos hacer esta división en

comisiones; y advierto que es una cuestión sencilla, porque alternando los nombres de cinco individuos en la corte, pueden hacerse cinco comisiones de tres miembros en que cada uno figuraría dos veces. Esas comisiones tendrían el objeto exclusivo de estudiar cierto número de asuntos desde su origen y los despacharían dando su sentencia; y esa sentencia sólo sería definitiva con el voto de todos los miembros de la corte. Así tendríamos la división del trabajo; serían cinco cortes las que estudiarían los asuntos y una sola la que los fallaría en definitiva. No se crea que este despacho previo no facilite la resolución de los asuntos, porque se trata de hombres acostumbrados á juzgar y que con el sólo informe de sus colegas pueden fallar con conciencia. Sucede frecuentemente que si un individuo lee en un diario una sentencia que se publica, por poco versado que sea en el derecho, puede decir si esa sentencia es buena ó mala. Este es el principio general que debe adoptarse.

De manera que por este sistema resultan que tres miembros estudiarían los asuntos y serían los responsables directos del fallo y los otros vigilarían el sistema, es decir, el principio general de derecho, que quedaría salvado como un antecedente necesario. Creo que por este sistema se reunirían las ventajas de uno y otro, sin aumentar los gastos, porque lo que propone la comisión es enormemente caro. El sistema de las cortes de circuito solo es aplicable á un país donde hay millones de habitantes, donde los medios de comunicación son fáciles, donde se va de Washington á cualquier punto del país en poco tiempo, en que se hace la visita de circuito en dos meses. Pero ¿cómo vamos á hacer viajar aquí á los miembros de las cortes por todas las provincias para resolver las causas que estén en estado? Creo que no estamos en situación de hacer esto, ni por la densidad de la población, ni por la importancia de los asuntos.

La organización que se proyecta y los medios de resolverla están muy bien; estamos muy habituados á hacer reglas de procedimientos sobre el principio de nuestra constitución; pero hagamos una sola corte de derecho y de política que dirima todas las cuestiones importantes del país. Por razón de las personas, se dice: ¿cómo vamos á fallar una causa en que un francés está interesado por pocos pesos? Eso puede dar lugar á una

cuestión diplomática, en que estén interesadas las relaciones exteriores del país. Esto no puede dejarlo el gobierno nacional entregado á la justicia de las provincias, porque la responsabilidad recae sobre la nación; y de aquí nace su jurisdicción sobre los extranjeros. La nación está obligada á responder por la irregularidad de las causas que ella ha resuelto; pero no puede responder del abuso ó del capricho de un tribunal de una provincia cualquiera, porque es una jurisdicción en que ella no puede intervenir. De manera que la causa más insignificante en su origen puede ser muy importante después. De ahí la necesidad de que la vigilancia de la corte se extienda á todos los asuntos que son fallados.

Por estas consideraciones, me veo en la necesidad de votar en contra del proyecto en general. Creo que estos elementos son indispensables, porque el proyecto tiende á resolver esta cuestión del cúmulo de asuntos aumentando el número de jueces, pero no aumentando el trabajo.

Sr. Ministro de justicia — Quiero hacer una pequeña observación, quiero dar este dato: he hecho confeccionar un presupuesto de los gastos que importaría la creación de estas dos cámaras, que por el momento podrían satisfacer completamente las exigencias de la justicia, y el gasto alcanzaría á 175.000 pesos. Las consideraciones expuestas por el señor diputado, para convencernos de que las causas que por razón de la materia deben ser del conocimiento de la suprema corte, ya sean originariamente ó en grado de apelación, no con relación al monto ó cuantía del asunto, sino á la delicadeza misma que entraña la cuestión en sí, debo hacer presente al señor diputado que la comisión se ha preocupado muy substancialmente de este punto y que cree que están salvadas todas las dificultades expuestas por el señor diputado en su exposición.

Y para terminar, haré presente que si cuando la nación tenía apenas 8.000.000 de renta pudo constituir el organismo que existe actualmente para responder á las necesidades de la justicia federal, hoy que ha crecido la renta veinte veces más, me parece que un gasto de 175.000 pesos por año no puede ser una razón de orden financiero para que pueda detenerse la reforma propuesta por la comisión.

He dicho. (*Muy bien!*)

Noviembre 29 de 1901.

CÁMARA DE DIPUTADOS

5.^a sesión de prórroga.

Sr. Ugarriza—Pido la palabra.

Sr. Presidente—Sólo para rectificar.

Sr. Ugarriza—En primer lugar, no creo que sea una economía despreciable la que puede hacerse con la no aceptación del sistema propuesto por la comisión, y en segundo lugar no creo que las rentas hayan crecido en la proporción que indica el señor ministro,

ni que estén en relación con el aumento de la población.

Sr. Presidente—No habiendo número en la casa para formar *quorum*, invito á la cámara á pasar á cuarto intermedio.

—Se pasa á cuarto intermedio, siendo las 6 y 45 p. m.